



Por Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social.

La ministra asegura que es necesaria la memoria política para construir soberanía popular. Además, destaca la importancia de destinar recursos al desarrollo de ramas de la producción competitivas que fortalezcan al mercado interno y externo.

El carácter democrático, federal y popular del proyecto político impulsado por el gobierno nacional desde el año 2003, permitió implementar políticas sociales inclusivas y desterrar las políticas neoliberales de exclusión. Pasamos de lo individual a lo colectivo, de la mirada esquivada e indiferente al compromiso y la solidaridad, de la persona objeto, a ser sujetos de participación, a ser simplemente argentinos.

En el 2003 existía más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, de allí que nos resultó imperioso y prioritario generar la recuperación de la estructura productiva con políticas económicas activas. Diseñamos una política de desendeudamiento externo que, una vez que se fue materializando, permitió comenzar a saldar la deuda interna. La decisión de cancelar la pesada herencia realizando una quita del 75% sobre el total de los acreedores, no tiene ningún antecedente en el mundo y marcó el inicio de la recuperación de la soberanía económica que estaba tan devaluada. Esta estrategia se consolidó definitivamente con el pago de la deuda al FMI y la exclusión de este organismo de los ámbitos de toma de decisiones fundamentales del Estado Argentino.

Empezamos a transitar con paso seguro y cada día más firme el camino de la soberanía económica y la política se constituyó, rotundamente, en la herramienta para terminar de afianzarla. Dos importantes decisiones transformaron, en forma paralela a la Argentina en el Estado más igualitario de Latinoamérica: la salida del déficit y la negación de nuestro gobierno de plegarse a las exigencias de los fondos buitres internacionales, lo que también le permitió a nuestro país, sobrevolar sin temores la profunda crisis económica internacional del año 2009. Memoria política para construir soberanía popular.

Nuestro proyecto nacional encontró y aún encuentra resistencias en ciertas corporaciones económicas trasnacionales y sus socios locales, cuyas caras más evidentes y desembozadas son los multimédios. Ello se hizo evidente cuando apuntábamos hacia lo que un destacado economista definió como “vivir con lo nuestro”, es decir, generar un equilibrio que permita al Estado Nacional acumular reservas, con recursos genuinos provenientes de las retenciones a las exportaciones y destinarlas al desarrollo de ramas de la producción competitivas que fortalezcan al mercado interno y externo, tanto en el campo como en la ciudad.

En este sentido, la creación del Ministerio de Producción habla visiblemente de la voluntad de darle un valor agregado superior a los bienes exportables. El sendero del desarrollo productivo con matriz diversificada dejó de ser una utopía, y comenzó a visualizarse el resurgimiento de actores de la economía solidaria, como ser los sectores de las Pymes, cooperativas y mutuales.

El camino de salida de la crisis económica se dio en un escenario de reconstrucción de ciudadanía marcado por la restitución de derechos. En el año 2003 eliminamos los cupos a las pensiones no contributivas, lo que permitió que las pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos, aumentaran en un número acorde a la realidad social y no a lo determinado por un cupo restrictivo y manejado en forma arbitraria. La política de ingresos se extendió posteriormente con el otorgamiento de la jubilación a las amas de casa, la ley de movilidad jubilatoria, la reducción del empleo en negro y la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo.

El abordaje integral del territorio con una mirada inclusiva y desde una perspectiva latinoamericana, permitió que el Estado llegara a rincones olvidados de la patria a los que el neoliberalismo había dejado de lado por considerarlos “territorios inviables”. Las campañas de documentación que restituyeron el derecho más básico que es el de la identidad, se extendieron a lo largo y a lo ancho de todo el país a través de una acción que involucró a los Ministerios del Interior y de Desarrollo Social de la Nación. No obstante, la utilización de los recursos del Estado para beneficio de todas y todos, permitió que el sistema de documentación se modernizara y se acelerara a los ritmos actuales.

La recuperación de empresas de servicios que habían sido privatizadas en los 90´ también marcó un hito en la recuperación de la soberanía económica y social. La estatización del Correo Argentino derribó el mito de que las empresas en manos del Estado daban pérdidas; en tanto la recuperación de la empresa Aysa permitió que desde una fuerte política de inversión pública, millones de argentinos accedieran al servicio básico del agua.

La política de integración latinoamericana se plasmó en un realineamiento de los países de la región, unidos para enfrentar políticas antinacionales y en defensa de los intereses de la Patria Grande. Precisamente ese es el nombre que recibió la campaña de documentación que regularizó la situación de miles de inmigrantes de países limítrofes y sus familias. Como expresara Cristina, nuestra Presidenta: “Argentina ya eligió donde tiene su corazón”.

La ley 26.061 sancionada en el año 2005 que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que terminó con más de 100 años de patronato tuvo su corolario cuando se

dictó el decreto que establece el derecho a la Asignación Universal por Hijo, para la protección social. Esto se logró con una medida económica estructural: la eliminación de las AFJP y la recuperación de los aportes jubilatorios por parte del Estado. Contribuciones que durante años enriquecieron los bolsillos de los especuladores financieros y que hoy permiten que el Anses pueda realizar préstamos de rápida recuperación y aplicarlos al desarrollo de la matriz productiva con la consecuente creación de empleo, que redundan en un aumento de los fondos jubilatorios.

La enumeración de los logros del proyecto que hoy encabeza y asume su representación política Cristina Fernández de Kirchner desde la Presidencia de la Nación y que arrancó en el año 2003 de la mano de Néstor Kirchner, es muy extensa. Tal vez uno de los mayores méritos de este proyecto haya sido el de haberse construido desde la política colectivamente generando su propio consenso. El otro mérito, es que, una constante de las acciones de gobierno siempre ha sido la de no estancarse sobre los logros e ir “siempre por más” y nunca menos cuando se trata de reivindicar los derechos del pueblo.